



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
20 de diciembre de 2002  
Español  
Original: inglés

---

### **Carta de fecha 19 de diciembre de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001), relativa a la lucha contra el terrorismo**

Le escribo en relación con mi carta de 6 de agosto de 2002 (S/2002/900).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido de Italia el informe complementario, que se adjunta, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradeceré que se sirva hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

*(Firmado)* Jeremy **Greenstock**  
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido  
en virtud de la resolución 1373 (2001),  
relativa a la lucha contra el terrorismo



**Anexo**

**Carta de fecha 17 de diciembre de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001), relativa a la lucha contra el terrorismo, por el Representante Permanente de Italia ante las Naciones Unidas**

En relación con mi carta de fecha 15 de julio de 2002, me es grato adjuntarle mayor información suministrada por las autoridades italianas competentes acerca de la situación actual del cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el apéndice).

*(Firmado)* Sergio Vento

## Apéndice

### **Informe complementario presentado por Italia al Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra el Terrorismo**

#### **Párrafo 1 a)**

**Se ha creado un grupo de trabajo especial encargado de acelerar el procedimiento de ratificación del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y examinar los cambios que han de introducirse en la legislación interna de Italia. El Comité contra el Terrorismo agradecería que se le enviara un informe sobre la marcha de esos cambios.**

Véase la respuesta en el párrafo 3 d) *infra*.

**En tanto miembro del G-20, Italia se ha comprometido a detener el uso indebido de las redes bancarias informales. Sírvase comentar la forma en que esto se refleja o se reflejará en la legislación italiana.**

Una forma en que las organizaciones terroristas se financian es el de los circuitos bancarios llamados informales. Se considera que con esos circuitos clandestinos las organizaciones terroristas acumulan y transfieren grandes cantidades de dinero. Esas operaciones se basan en la confianza recíproca establecida entre sus miembros y se conocen en diferentes países con distintos nombres, como Banca Hawala (Reino Unido, India, Pakistán), Hundi (Oriente Medio), Citi Banking (Asia), Banca Chop Shop (China) y Stash House (Estados Unidos y América Latina). Independientemente del nombre que se utilice, el circuito bancario informal transfiere enormes cantidades de dinero de un país a otro sin pasar por los circuitos tradicionales de transferencia financiera sin dejar huella alguna de la operación, pero, sobre todo, sin que el dinero se transfiera “físicamente”. Esos circuitos operan de manera bastante semejante a los sistemas de transferencia de dinero que tienen licencia para realizar actividades en los mercados legales, con la única diferencia de que los circuitos informales operan en forma completamente clandestina.

De esta manera, es bastante probable que esos “sistemas alternativos” posibiliten la transferencia de dinero efectivo a países en los que, por razones de estabilidad política, no existe una estructura financiera eficiente. Permiten además a las organizaciones que los administran obtener enormes comisiones (para garantizar que las transferencias lleguen con seguridad a su destino) o para financiar organizaciones terroristas mediante el uso parcial o total de esas comisiones para financiarlas. Finalmente, cabe imaginar que las medidas para limitar el blanqueo de dinero en el sistema bancario oficial son de hecho muy beneficiosas para el sistema informal debido a sus efectos sobre la competencia. Basta con pensar, por ejemplo, en la renuencia de un inmigrante ilegal, sin documentos de identidad, o simplemente sin permiso de residencia, a usar el sistema financiero legal para transferir dinero a su país considerando que actualmente casi todos los países occidentales requieren que quien desee transferir dinero al extranjero exhiba pruebas de identidad.

Con toda probabilidad los inmigrantes ilegales utilizarán o los circuitos financieros oficiales por intermedio de un amigo (probablemente una agencia de transferencia de dinero) o recurrirán al circuito financiero ilegal creado por su comunidad de compatriotas. De ahí el estrecho vínculo con el fenómeno muy pertinente de la

inmigración ilegal, con formas muy desarrolladas de uso financiero indebido y/o de operaciones bancarias ilegales. En este sentido debe señalarse que la policía financiera italiana (*Guardia di Finanza, GdF*) está realizando actualmente investigaciones generalizadas en toda esta esfera.

**Sírvase dar al Comité contra el Terrorismo copias de las directrices para el “Comité encargado de la coordinación de la información sobre activos financieros”**

Desde su creación ese Comité ha tratado de hacer las veces de foro para ajustar a las conclusiones más importantes de la labor del Comité de Seguridad Financiera, presidido por el Director General de Hacienda, la tarea de vigilar el funcionamiento del sistema encargado de prevenir y reprimir la financiación ilegal del terrorismo. En el Comité han participado representantes de los Ministerios de Economía y Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Industria y de los servicios de inteligencia.

Ese Comité, que inició sus funciones el 4 de marzo de este año, se ha reunido todos los meses centrando su labor en las transacciones financieras relacionadas con el terrorismo, incluidas la exportación de productos de doble uso y los posibles riesgos de la infiltración de los grupos terroristas entre los compradores de materiales químicos, biológicos y radiológicos relacionados con la amenaza del uso de armas no convencionales. Los objetivos perseguidos hasta ahora respecto de la identificación de las transacciones financieras con organizaciones terroristas y terroristas individuales han hecho una contribución concreta a las organizaciones internacionales en su evaluación de los nombres de las listas de las Naciones Unidas y en la preparación de las listas de la Unión Europea a los efectos de aplicar medidas de congelación de activos. En consecuencia, la función del Comité ha sido la de impulsar un intercambio de información, protegida por el grado necesario de confidencialidad, entre todas las entidades económicas y financieras y los servicios de inteligencia a fin de formular y organizar una estrategia operacional común.

**¿Qué penas son aplicables a las infracciones de las reglamentaciones de la Unión Europea encaminadas a prevenir y reprimir la financiación del terrorismo?**

El artículo 2 del Decreto Ley No. 369/01, promulgado como Ley No. 431, de 14 de diciembre de 2001, introduce sanciones respecto de todas las infracciones de los reglamentos aprobados por el Consejo de la Unión Europea, así como en aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declarando su nulidad absoluta. Las infracciones se castigan con multa administrativa de un valor no inferior a la mitad del valor de la transacción y no superior al doble de su valor. Los intermediarios financieros, así como las empresas de seguros, están también obligados a notificar al Ministerio de Economía y Hacienda el monto del capital congelado y todos los otros recursos financieros congelados dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se constituyan el capital o los recursos. En caso de omisión o retraso de la presentación de esa notificación, si no implica un delito penal, el infractor se hace responsable de un multa administrativa.

A este respecto cabe señalar la forma en que se están vigilando los canales financieros en Italia para combinar la legislación nacional con una actualización constante de los instrumentos de cooperación internacional. Al mismo tiempo que se adoptaron las medidas para tipificar como delito el blanqueo de dinero<sup>1</sup> Italia incorporaba en la legislación interna las recomendaciones del Grupo Especial de

Expertos Financieros sobre blanqueo de capitales (FATF)<sup>2</sup> y la Directiva 91/308 de la Comunidad. Con respecto a esta última (de conformidad con el Decreto Legislativo No. 153/97) toda la información recibida de los intermediarios financieros, que anteriormente se había dirigido a los jefes policiales de provincial (*Questori*), que la transmitían al jefe de la fuerza de policía y la dependencia policial especial de moneda (*Nucleo Speciale Polizia Valutaria*, NSPV) de la Guardia di Finanza (GdF) se centraliza ahora en la Oficina Italiana de Cambio (*Ufficio Italiano dei Cambi*, UIC)<sup>3</sup>. Tras hacer un análisis financiero de los medios implicados, la UIC transmite los avisos, junto con su propio informe, al NSPV y a la Dirección de Investigación de la Mafia (DIA). A fin de garantizar la coordinación y de prevenir la duplicación entre la GdF y la DIA se ha firmado un acuerdo en cuya virtud aquella se ocupa de los delitos relacionados con la mafia en tanto que la GdF se ocupa de los demás delitos.

Las medidas de prevención del blanqueo de dinero según esas normas y reglamentos, y su eficacia, han sido encomiados por el FATF, que en su informe relativo a Italia de 1998 destacó lo apropiado de hacer participar en la lucha contra esas actividades sólo a dos organizaciones investigadoras, desde el punto de vista financiero, así como a la cooperación de larga data entre la UIC y el NSPV, ya que esto resuelve muchos de los problemas de coordinación que otros países encuentran al tener gran número de organismos investigadores dedicados a luchar contra el blanqueo de dinero. Finalmente, en junio de 2001, en una reunión plenaria del FATF encaminada a determinar el nivel de preparación de las disposiciones estatutarias y los acuerdos operacionales de los países miembros del Grupo, atendido el probable riesgo de blanqueo de dinero relacionado con la introducción del euro, una vez más se consideró que las normas adoptadas por Italia eran particularmente apropiadas y ajustadas a las normas sugeridas en las recomendaciones del FATF.

Además de lo anterior, en el Decreto Legislativo No. 374, de 25 de septiembre de 1999, se ampliaron las obligaciones previstas en la Ley No. 197/91 de incluir las categorías de empresas que, si bien no hacían transacciones financieras ellas mismas, podrían en todo caso ser explotadas a los efectos del blanqueo de dinero<sup>4</sup>. Esta disposición no está aún en funciones por cuanto aún se está preparando el reglamento interdepartamental relativo a su aplicación. El sistema de información y detección de informaciones sospechosas ha sido completado además con algunas otras disposiciones encaminadas a hacer posible vigilar las operaciones monetarias en ambos sentidos entre Italia y el extranjero. Este asunto —tras la destipificación de las infracciones monetarias (con la Ley No. 455, de 21 de octubre de 1988) y tras la promulgación de la Directiva 88/361/EEC, que “levantó las restricciones de los movimientos de capital entre individuos residentes en los Estados Miembros”— fue reglamentado por la Ley No. 227, de 4 de agosto de 1990, con la introducción del sistema llamado de “canalización estatutaria” de transacciones de sumas superiores a 20 millones de liras, con el requisito de que se hiciera por intermedio de intermediarios bancarios y financieros. Posteriormente, el Decreto Legislativo No. 125, de 30 de abril de 1997, reemplazó al sistema de “canalización estatutaria” con la obligación de declarar todas las transferencias de dinero superiores a 20 millones de liras a la UIC.

Las medidas para luchar contra el blanqueo de dinero se perfeccionaron con la institución de la inscripción de cuentas y depósitos en virtud del párrafo 4 del artículo 20 de la Ley No. 413, de 30 de diciembre de 1991. Un grupo de trabajo especial establecido en el Ministerio de Economía y Hacienda realiza actualmente actividades

encaminadas a definir las características orgánicas, estructurales y regulatorias de este nuevo régimen. Pondrán en práctica todas esas medidas diversos organismos e instituciones gubernamentales, incluida la GdF, cada una sobre la base de sus calificaciones profesionales especiales.

**Párrafo 1 c)**

**Según el informe, se ha dado instrucciones a los “intermediarios bancarios y financieros” para que notifiquen con prontitud a la Oficina Italiana de Cambio y a la Unidad de Inteligencia Financiera “acerca de toda operación y relaciones” relacionadas con la financiación del terrorismo.**

**Sírvase explicar lo que se quiere decir con “relación” y la forma en que se define en la legislación italiana “intermediarios financieros”.**

Según los reglamentos de la UIC de 9 de noviembre de 2001, en que se establecieron directrices para luchar contra la financiación del terrorismo, se exige a los bancos y a otros intermediarios financieros que notifiquen a la UIC todas las transacciones, relaciones y cualquier otra información disponible que se pueda relacionar con la financiación de organizaciones terroristas o de los individuos designados en las listas difundidas por la UIC. La expresión “relación” se utiliza claramente de manera que sea lo más amplia posible, y, por lo tanto, incluye las cuentas corrientes, las cuentas de depósito y todas las demás relaciones continuas, tanto para el portador como para personas designadas, en efectivo o en valores, por todas las sumas, según se especifica en el Decreto Ministerial No. 19.12.91, en el que se establecen los procedimientos para poner en práctica las disposiciones de la Ley No. 197/91.

En el sistema financiero son “intermediarios financieros” los enumerados actualmente en el artículo 2 de la Ley 197/91 (oficinas gubernamentales, bancos, empresas de seguros, empresas fiduciarias, etc., incluidos todos los intermediarios cuyo giro principal consiste en otorgar préstamos, adquirir intereses en acciones, servir de agentes de transacciones monetarias, recolección de dinero efectivo, servicios de pago y servicios de transferencia de fondos). Cabe recordar además que la lista actual de intermediarios financieros ha sido superada en parte, y es también menos amplia que las normas promulgadas desde 1991; además, la nueva directiva de la Comunidad 97/2001/EC, sobre lucha contra el blanqueo de dinero, ha introducido además algunas enmiendas en esta esfera y ha fijado como plazo junio de 2003 para que todos los Estados miembros actualicen sus listas de intermediarios financieros.

**En este contexto ¿qué sanciones se aplican a los intermediarios financieros que no notifiquen prontamente esas “operaciones y relaciones”?**

La omisión de informar a la UIC de cualquier operación o relación vinculada con la financiación del terrorismo hace posible imponer a los intermediarios una multa administrativa de hasta la mitad del valor de la transacción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5<sup>5</sup> de la Ley No. 197/91.

**Sírvase reseñar la base jurídica que permite a la UIC dictar instrucciones jurídicamente obligatorias para congelar los fondos pertenecientes a individuos u organizaciones que no figuren en las listas adjuntas a los actos legislativos de la Unión Europea, pero que figuren en otras listas publicadas en el sitio en la Web “[www.uic.it/liste/terrorismo.htm](http://www.uic.it/liste/terrorismo.htm)”?**

La labor de la UIC respecto de la presentación de informes acerca de operaciones sospechosas a los efectos de luchar contra el blanqueo de dinero se basa en las disposiciones del Decreto Legislativo No. 153, de 26 de mayo de 1997. Con su independencia funcional, orgánica y operacional (que se le confirió en el artículo 3 ter de la Ley 197/91, introducida por el anteriormente mencionado Decreto Legislativo No. 153/97), la UIC dictó su propia circular de 22 de agosto de 1997 con instrucciones para la presentación de información acerca de operaciones sospechosas, que es aplicable ahora a los delitos relacionados con la financiación del terrorismo. Además, la UIC ha impartido instrucciones (circular de fecha 9 de noviembre de 2001, publicada en el diario oficial No. 266, de 15 de noviembre de 2001) para la lucha financiera contra el terrorismo, particularmente mediante la solicitud dirigida a los bancos y a otros intermediarios financieros de que presenten informaciones acerca de sus actividades, relaciones y toda otra información disponible vinculada a individuos designados en las listas publicadas por la UIC, también mediante publicación en Internet. Este marco estatutario de referencia se definió sistemáticamente en forma posterior en el artículo 3 ter de la Ley No. 73, de 23 de abril de 2002, que incorporó en el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 369/2001 un párrafo 4 bis en el que se dispone que ejercen las facultades de la UIC y de la NSPV de conformidad con las disposiciones actuales para tomar medidas preventivas contra sistemas financieros usados para el blanqueo de dinero los mismos organismos encargados de luchar contra la financiación del terrorismo internacional.

**¿Qué medidas ha adoptado o se propone adoptar Italia para congelar los fondos u otros activos o recursos económicos de una persona o entidad que apoye el terrorismo en Italia o en cualquier otro país de la Unión Europea?**

Sobre la base de su experiencia en la lucha contra el terrorismo y gracias a la gran cantidad de legislación y reglamentos que se han dictado a lo largo de los años, Italia estuvo en condiciones de reaccionar prontamente a los acontecimientos del 11 de septiembre. Se completó el ajuste de la legislación italiana y se han mejorado los procedimientos operacionales, que ahora están plenamente en vigor. La lucha contra la financiación del terrorismo es una prioridad fundamental, y por conducto de la labor del CSF Italia ha actuado de manera eficiente y pronta para bloquear los activos de individuos o de organizaciones terroristas con pleno cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución 1390 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de aplicar el mecanismo de sanciones introducido por la Unión Europea. El CSF es la autoridad encargada de preparar la propuesta de Italia para incorporar los nombres de individuos o de grupos terroristas en la lista de las Naciones Unidas (de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y de las resoluciones posteriores) y de la Unión Europea (de conformidad con el reglamento 2580/2001 y la posición común 931/2001). Con las funciones especiales adoptadas, ha acopiado información que estaba en posesión de las oficinas gubernamentales, renunciando a la ley de secretos oficiales, y solicitando a la UIC, la Comisión del Mercado de Valores (CONSOB) y la GdF que realicen mayores investigaciones a fin de apoyar las acusaciones en contra de los nombres propuestos.

Italia ha establecido una cooperación estrecha y en marcha con organismos que realizan funciones semejantes a las del CSF en otros países y ha hecho una contribución activa a la preparación de la lista conjunta de los países del G7, así como una lista conjunta preparada con los Estados Unidos, las que se han presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el marco de la resolución 1390. Según

los últimos datos actualizados al 11 de septiembre de 2002, se han congelado 70 cuentas pertenecientes a 70 personas, con un total de 483.000 euros.

En los casos en que se ha solicitado que se congelen los activos pertenecientes a individuos o entidades no previstos en las regulaciones de la Comunidad, ha debido crearse una medida especial. Hay también instrumentos administrativos que han hecho posible requisar preventivamente fondos que se sospechaba que pertenecían a terroristas. En la legislación italiana puede utilizarse un decreto penal de incautación para congelar los activos económicos y los recursos financieros imputables a organizaciones terroristas. Puede ser objeto de un decreto penal de incautación todo activo o recurso a condición de que estén relacionados con actividades delictivas que sean objeto de una investigación criminal o de un asunto penal en marcha. Datos actualizados, comunicados directamente al CSF por las oficinas de los fiscales públicos italianos que participan en ese tipo de medidas, indican que hasta ahora se han decomisado más de 4 millones de euros.

Una novedad muy importante que permitirá a Italia abrir camino en la Unión Europea es un proyecto de ley que prevé un procedimiento para congelar activos no financieros, lo que permitirá evitar los problemas relacionados con la determinación de la responsabilidad para congelarlos y la forma de aplicar medidas de congelación, así como los problemas relacionados con la custodia y la gestión de los activos congelados. La lucha contra el blanqueo de dinero sólo puede ser efectiva si se ocupa además de las cuestiones no financieras, y la experiencia de Italia se pondrá a disposición de nuestros asociados internacionales.

#### **Párrafo 1 d)**

**¿Cómo se asegura el sistema de investigación financiera de que los fondos recibidos por asociaciones no se desvíen de los propósitos señalados hacia actividades terroristas?**

Actualmente no hay disposiciones concretas respecto del uso de fondos desviados para actividades terroristas por asociaciones de ningún tipo, aparte de las normas generales relativas al blanqueo de dinero cuando se canaliza el dinero por bancos u otros intermediarios financieros a los que se exige que identifiquen a las partes y que inscriban las transacciones superiores a un cierto límite, y todas las operaciones y transacciones sospechosas.

#### **Párrafo 2 a)**

**La directiva del Consejo Europeo 91/477/EEC impone a Italia, junto con todos los demás Estados miembros de la UE, la obligación de permitir la adquisición de cierta categoría de armas sólo por personas que tengan fundadas razones para tener esas armas y que no sea probable que constituyan un peligro para el orden o la seguridad públicos. El Comité contra el Terrorismo agradecería que se aclarara en mayor medida qué constituye una “fundada razón” en Italia a estos efectos y del procedimiento para determinar si una persona plantea un peligro para el orden y la seguridad públicos.**

La Directiva 91/477/EEC, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas dentro de la Comunidad (que se incorporó al sistema jurídico italiano en virtud del Decreto Legislativo No. 521, de 30 de diciembre de 1992, y el Decreto No. 635, de 30 de octubre de 1996), subdivide las armas en cuatro categorías. La categoría A



está constituida por armas prohibidas, es decir, armas de guerra a las que no son aplicables las disposiciones de la misma Directiva, la categoría B, constituida por las armas sujetas a autorización, y las categorías C y D, sujetas simplemente a la presentación de una declaración. En Italia se incorporó en la legislación la Directiva 91/477/EEC sobre una base más restrictiva que la de la directiva de la Comunidad; la legislación italiana dispone que las armas de las categorías C y D, es decir, aquellas a las que la Directiva se refiere sólo en cuanto a la necesidad de informar a fin de poder adquirirlas o transferirlas, forman parte ahora de la categoría B, para cuya manufactura, importación, exportación, colección por razones comerciales o industriales y venta se requiere una licencia especial. Además, en cuanto a la cuestión de la autorización para portar armas de fuego a los efectos de la defensa personal, que obviamente no caen en la categoría A (armas de fuego prohibidas), se prevé que el solicitante demuestre una necesidad manifiesta y una causa fundada, y que la autoridad verifique que existen tanto la necesidad como la causa, en cada caso. Los artículos 11 y 43 de la Ley Italiana de Seguridad Pública (aprobada por el Decreto Real No. 773, de 18 de junio de 1931) disponen que la policía no podrá conceder autorización para portar armas a ninguna persona que haya sido condenada a pena de prisión superior a tres años por delitos cometidos deliberadamente y con premeditación, ni a las personas que hayan sido sometidas a detención en aras de la seguridad, o que hayan sido declaradas delincuentes habituales o profesionales, o que tengan tendencias criminales, o a nadie que haya sido condenado por delitos contra el Estado o el orden público, o por delitos cometidos contra las personas con violencia, o por hurto, robo, extorsión, secuestro con fines de robo o extorsión, o por resistir con violencia a la detención.

**Sírvase explicar la forma en que Italia se ocupa de la cuestión del reclutamiento de miembros de grupos terroristas, tanto dentro como fuera de Italia, sobre la base del artículo 270 bis del Código Penal**

“El reclutamiento de miembros de grupos terroristas” es un delito tipificado en el artículo 270 bis del Código Penal. El reclutamiento es una de las formas en que se promueve, constituye y organiza una conspiración con fines de terrorismo, incluida la conspiración internacional. Se desprende de ello que el reclutamiento de miembros en sí mismo (independientemente, en otras palabras, de si se cometen o no otros delitos) es un delito punible con arreglo al artículo 270 bis del Código Penal. Cuando se está realizando una investigación de este tipo de reclutamiento pueden utilizarse todos los instrumentos investigativos introducidos en el Decreto Legislativo No. 374/2001 (ilustrado en el párrafo 2 a) del primer informe de Italia al Comité contra el Terrorismo).

La cuestión del reclutamiento de miembros de grupos terroristas se rige por una ley especial del Parlamento con arreglo a la legislación vigente. La Ley No. 210, de 12 de mayo de 1995, en la que se ratificó y puso en vigor el Convenio Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 4 de diciembre de 1989, sobre el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. En esa ley se disponen expresamente sanciones que se han de imponer con arreglo al derecho italiano a toda persona que reclute a individuos a los fines de incitarlos a cometer los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley (en este caso concreto, participación en acciones violentas encaminadas a cambiar el orden constitucional o la integridad territorial de un Estado extranjero) en dos casos: a) un delito cometido en el extranjero por un ciudadano italiano, b) un delito cometido en el extranjero por un

extranjero que se halle en Italia y a cuyo respecto no se haya otorgado o aceptado la extradición. Las penas previstas son de prisión de cuatro a 14 años.

El nuevo texto del artículo 270 *bis* del Código Penal (en la forma enmendada por la ley No. 438, de 15 de diciembre de 2001) tiene un alcance más general y prevé sanciones para quien promueva, constituya, organice, gestione o financie conspiraciones con fines de terrorismo, incluido el terrorismo internacional. En consecuencia, se deja entregada a los tribunales la decisión de ampliar el alcance de la disposición penal para aplicarla al reclutamiento. Sobre la base del principio de la territorialidad del derecho penal, esa disposición da a los tribunales italianos plena jurisdicción para enjuiciar todo crimen cometido en Italia y prevé además el enjuiciamiento y castigo de todo aquel que sea hallado responsable de cometer actos terroristas en el extranjero o, de conformidad con el artículo 7 del Código Penal, por los crímenes cometidos contra la personalidad del Estado italiano.

## **Párrafo 2 b)**

**¿Qué instituciones italianas están encargadas de dar alerta anticipada a otros Estados y qué medidas se han adoptado a este respecto?**

La Dirección Central de Policía Preventiva (Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione) se encarga del intercambio de inteligencia y, por lo tanto, de la transmisión de información urgente respecto de la seguridad nacional a otros Estados en representación del Departamento de Seguridad Pública. Esta Dirección es el centro de coordinación del Grupo de Trabajo Policial sobre el Terrorismo compuesto hasta el momento por 21 países (los 15 países de la UE más Suiza, Noruega, Polonia, la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia y Hungría) que utiliza un sistema directo encriptado para el intercambio de inteligencia. Se comunica la inteligencia a otros países que no tienen este contacto directo por medio de la Interpol o de Europol en el caso de los Estados miembros de la Unión Europea.

Cabe recordar además el sistema de coordinación contra el terrorismo establecido por la Conferencia de Países del Mediterráneo Occidental (que incluye a Italia, Portugal, Argelia, Francia, España, Marruecos, Túnez, Libia y Malta) y la Asociación Euromediterránea, en que participan 15 países de la Unión Europea con 12 países del Mediterráneo (Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía, la Autoridad Palestina).

En el sector de la inteligencia las relaciones con otros Estados corresponden a la jurisdicción de los servicios de inteligencia y seguridad.

**Sírvase suministrar al Comité contra el Terrorismo información acerca del mecanismo de cooperación interinstitucional entre las autoridades encargadas de la lucha contra el tráfico de estupefacientes, y de la investigación financiera y de la seguridad, especialmente con respecto a los controles fronterizos encaminados a prevenir el movimiento de terroristas.**

En lo que respecta al control fronterizo de terroristas, Italia sigue usando el sistema de "Registro Fronterizo" en sus diversas formas (4R: rechazo; 5R: registro aduanero; 6R: informe confidencial de vigilancia; 7R: identificación) especialmente con respecto al control de las fronteras externas de Schengen (para Italia, Suiza y Eslovenia). Con la adhesión de Italia a los Acuerdos Schengen, se usa también el Sistema Schengen para los mismos efectos por conducto de los artículos 95 (detención); 96 (rechazo) y 97 (control aduanero e identificación) en todo el territorio del

grupo de países Schengen. La Policía de Fronteras, que tiene la obligación institucional de controlar a todos los que ingresan a la zona Schengen por los cruces autorizados, están en condiciones operacionales de identificar a todos aquellos contra los cuales se haya dictado una medida policial o judicial, también relacionada con asuntos de terrorismo. El procedimiento utilizado para controlarlos es el SIS (Sistema de Información de Schengen), que es un sistema inmediato de cooperación operacional, por cuanto es un banco de datos comunes que todos los países asociados pueden consultar.

**Párrafo 2 c)**

**¿Qué criterios utiliza Italia para definir las “zonas más delicadas” y los “países más delicados”, expresiones que aparecen en el párrafo 2 c) a) del informe?**

En lo que respecta a la seguridad aérea el Programa Nacional de Seguridad elaborado por el Comité Interdepartamental de Seguridad introduce el concepto de “vuelos delicados”. Este se refiere a los vuelos entre países de los cuales es posible que provenga una amenaza terrorista o de los países que se consideren como riesgo de posible objetivo terrorista. Esos Estados conforman una lista (“países delicados”), a cuyo respecto este programa prevé un procedimiento de actualización y revisión.

El concepto de “país delicado” es también importante, aunque las condiciones y los propósitos difieren, para la expedición de visas y permisos fronterizos. En este caso se requiere la consulta con las autoridades centrales de seguridad respecto de los nacionales procedentes de algunos países que los Estados Schengen consideran que merecen atención desde el punto de vista de la seguridad nacional.

**Párrafo 2 e)**

**Sírvase explicar la forma en que en el derecho italiano se tipifican los actos de terrorismo contra ciudadanos extranjeros, especialmente cuando estos actos se cometen en el extranjero.**

**¿Cuál es la competencia de los tribunales de Italia para enjuiciar actos delictivos de los siguientes tipos: un acto cometido fuera de Italia por una persona que sea ciudadano de Italia o que habitualmente resida en Italia (ya sea que esa persona se halle actualmente presente en Italia o no); un acto cometido fuera de Italia por un extranjero que se halle actualmente en Italia?**

La jurisdicción italiana respecto de los actos de terrorismo dentro de Italia o en el extranjero por italianos o extranjeros está sometida a las normas generales del Código Penal. Hay normas especiales que se ocupan solamente de los delitos políticos cometidos en el extranjero, pero el Estado italiano ya no considera que los actos de terrorismo sean delitos políticos.

Sobre la base de las normas generales, los actos de terrorismo cometidos contra ciudadanos extranjeros en suelo italiano están sometidos al derecho italiano en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Código Penal (el principio de la territorialidad del derecho penal). Se considera que se ha cometido un acto de terrorismo dentro del Estado italiano cuando la conducta criminal o sus efectos ocurren total o parcialmente (cuando, por ejemplo, se suministran las armas en Italia para la comisión de un acto terrorista en el extranjero) en suelo italiano.

Los actos de terrorismo cometidos contra extranjeros en el extranjero podrán ser enjuiciados ante tribunales italianos si el acusado es un nacional italiano y a condición de que el acusado se halle en el territorio del Estado italiano. Por el contrario, si la persona que comete el acto de terrorismo es un extranjero, los tribunales italianos sólo tendrán jurisdicción si el acto se ha cometido contra el Estado italiano o contra un nacional italiano. En virtud de este sistema la jurisdicción italiana depende de la ciudadanía, no de la residencia. Esto significa que la residencia habitual en Italia de un extranjero que haya cometido un acto de terrorismo en el extranjero no otorga jurisdicción a los tribunales italianos (a menos que se dé la condición general anteriormente mencionada, a saber, que el acto se haya cometido contra el Estado italiano o contra un ciudadano italiano).

**Párrafo 2 f)**

**¿Es requisito previo de que Italia ofrezca asistencia jurídica a otros países, según requiere este apartado, la existencia de un acuerdo o arreglo bilateral o multilateral?**

**¿Cuál es el plazo dentro del cual se debe cumplir una solicitud de asistencia judicial en las investigaciones criminales o los procedimientos penales (especialmente los relacionados con la financiación o apoyo de actos de terrorismo) y cuánto tiempo tarda como promedio en la práctica tramitar una solicitud de ese tipo en Italia?**

La existencia de acuerdos bilaterales y, cuando no existan, de acuerdos multilaterales que rijan la asistencia judicial penal y la extradición no constituyen una condición sine qua non a los efectos de la cooperación judicial penal. La cooperación se basa efectivamente además en los principios de “cortesía internacional” y reciprocidad, y el procedimiento interno se rige por las normas del Código de Procedimiento Penal.

Toda solicitud de asistencia judicial en materia penal debe hacerse por norma general sobre la base de convenios vigentes, ya sean multilaterales o bilaterales, acerca de la materia. Cuando no existan la cooperación tiene lugar sobre la base de los principios de la “cortesía internacional” y la reciprocidad, por la vía diplomática. La solicitud debe ir acompañada de la documentación pertinente con arreglo a los términos del convenio o acuerdo pertinente con la parte solicitante. Es difícil definir exactamente la duración, por cuanto varía según la complejidad del procedimiento para dar cumplimiento a la solicitud y la vía de transmisión utilizada, o si se basa en el principio de “cortesía internacional” y reciprocidad, y si el procedimiento interno se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Penal o no.

**Párrafo 2 g)**

**¿En qué forma ha aplicado o cómo proyecta aplicar Italia los controles en sus fronteras marítimas y puertos a fin de prevenir el movimiento de personas implicadas o supuestamente implicadas en actos de terrorismo?**

En la inteligencia de que, hasta hora, no ha surgido ninguna prueba en las investigaciones o en los tribunales que sugiera que haya un vínculo estrecho entre inmigración ilegal y terrorismo, al menos en sus principales formas (a través de las fronteras marítimas o terrestres), los controles en los puertos se realizan de conformidad con las normas nacionales y en cumplimiento de los procedimientos enunciados

en el Manual Común para las Fronteras Schengen y las decisiones del Comité Ejecutivo de Schengen.

En lo que se refiere al tráfico de inmigrantes ilegales, la obligación de Italia de lucha contra ello es sabida, y participaría también la marina italiana, la capitanía de puerto (*Capitaneria di Porto*) y todas las fuerzas policiales. Se fotografía y toma las huellas digitales a todos los inmigrantes ilegales, sin distinción alguna, y se deportan del territorio italiano o, si piden asilo político, se les concede un permiso de estada o se devuelven a su país de origen cuando Italia ha concertado un acuerdo de reingreso de ese tipo. También hay una cooperación estrecha en cuanto al intercambio de inteligencia y para realizar operaciones conjuntas entre las organizaciones locales encargadas de luchar contra el terrorismo y la inteligencia y la policía fronteriza marítima.

Para completar esta información, también se controla el tráfico de carga, y la GdF desempeña un papel operacional importante a este respecto. Entre sus principales operaciones se incluyen el control de las mercaderías al salir de las zonas aduaneras mediante un análisis sistemático y detenido, y la adopción de medidas enérgicas y de investigaciones orientadas localmente. Considerando la necesidad general de que se agilice el comercio internacional para que sea rápido y fluido, otro criterio que se sigue es el uso de tecnología moderna que hace posible realizar comprobaciones prontas y eficaces no invasivas de los contenedores. A este respecto, la GdF, con arreglo a un programa operacional general encaminado a garantizar la seguridad para el desarrollo de Italia meridional, ha adquirido siete sistemas móviles (el modelo de Silhouette Scan) para el control radiográfico no invasivo de los contenedores, y grandes vehículos para la inspección radiográfica de la carga. Este sistema se usa con excelentes resultados para controlar los camiones cubiertos por lonas, los vehículos refrigerados, los camiones tanque y los camiones articulados y contenedores, así como todos los grandes vehículos que, como consecuencia del sistema de transporte o de la técnica, no se pueden inspeccionar con los métodos tradicionales o que hacen que resulte sumamente difícil utilizar esos métodos.

Además, Italia ha concertado un acuerdo con los Estados Unidos acerca de la iniciativa de la seguridad de contenedores, un sistema que cabe esperar que se extienda a todos los Estados miembros de la Unión Europea.

**Sírvase dar al Comité contra el Terrorismo un informe sobre la marcha de la tipificación como delito penal de la falsificación de “documentos de ingresos y estada”**

En materia de lucha contra la inmigración ilegal, en el sentido amplio del término, la Ley No. 189, de enmienda de la Ley de Inmigración y Asilo, de 30 de julio de 2002, creó el delito de falsificación o alteración de permiso de estada, de los contratos de estada o tarjeta de residencia, y de cualquier otro documento destinado a su uso para el otorgamiento de algunos de esos documentos (por ejemplo, un pasaporte o una visa). Este nuevo delito acarrea penas más graves (de uno a seis años de prisión), que las previstas respecto de la falsificación en el Código Penal y, como consecuencia, la posibilidad de detención.

El derecho penal italiano vigente no contiene una disposición específica respecto del delito de “falsificación de documentos de ingreso y estada”. No obstante se puede enjuiciar por ese delito con arreglo a las disposiciones del Título VII del Libro II del Código Penal, sobre “delitos contra la fe pública”, y en particular el

artículo 482 (fraude material cometido por particulares), que dispone una pena de prisión de dos años y ocho meses hasta seis años y ocho meses con respecto a diversos tipos de delitos que corresponden a esta categoría.

**Párrafo 3 a)**

**Sírvase explicar la forma en que Italia se propone aplicar este apartado, en particular en lo que se refiere al uso de las tecnologías de comunicación por los grupos terroristas, dado que en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 374/2001 se prevé la posibilidad de controles preventivos y de la interceptación de comunicaciones**

En cuanto a los controles o escuchas, la legislación antiterrorismo (Ley No. 438, de 2001), hace extensiva a esta esfera dos disposiciones que se han ensayado con éxito en la lucha contra la delincuencia organizada. Ella hace posible el uso de instrumentos de investigación más flexibles. La primera disposición corresponde a lo que podría llamarse la fase de investigación “judicial”, en tanto que la segunda tiene carácter preventivo y corresponde a la fase de las investigaciones realizadas con fines preventivos o para reunir inteligencia e información.

En lo que se refiere a las escuchas “judiciales” (que requieren un decreto del juez de instrucción) el artículo 3 de la Ley dispone que, como excepción de las normas que rigen las escuchas con arreglo a los artículos 266 y siguientes del Código Penal, en el caso de los juicios por delitos relacionados con el terrorismo (artículo 270-bis del Código Penal) y de los señalados en el artículo 270-ter del Código Penal (cómplices y encubridores de la conspiración) sólo se pueden autorizar las escuchas cuando hay suficientes pruebas de culpabilidad *prima facie* (y que no requieren pruebas graves de culpabilidad, como ocurre normalmente) y a condición de que esas operaciones sean necesarias (en lugar de indispensables) para poder llevar adelante las investigaciones.

La interceptación de comunicaciones y las escuchas de personas presentes pueden autorizarse en hogares particulares sin el requisito de razones fundadas de que se estén realizando actividades criminales. En esa fase, designada como la fase de “investigación preliminar” en el artículo 266-bis del Código Penal, con la autorización de los tribunales, es también posible allanar ilegalmente sistemas de computación o redes de computación o interceptar los intercambios de datos entre varios sistemas.

Se aplican un conjunto diferente de normas y un alcance diferente en el caso de las escuchas “preventivas” y la interceptación mencionadas en el artículo 5 de la Ley No. 438/2001, que promulgó el Decreto Legislativo No. 374/2001. Esas nuevas disposiciones hacen posible interceptar comunicaciones o allanar la correspondencia por computadora o las conversaciones entre personas cuando es necesario adquirir información para prevenir delitos cometidos con fines de terrorismo, y hace posible usar ese instrumento de acopio de información en un momento previo de la comisión efectiva del delito, siempre que se reúnan dos condiciones: pruebas derivadas de las investigaciones que justifiquen la actividad preventiva y una evaluación del fiscal público que indique que es necesaria. Los dos tipos de interceptación de comunicaciones difieren en cuanto a su propósito: la ley dispone expresamente que no se podrán utilizar en juicios penales pruebas adquiridas con la interceptación preventiva ni mencionarse en los informes investigativos o una deposición, ni revelarse de otra manera. La situación es muy diferente en el caso de la interceptación autorizada por

el tribunal, porque esa forma de interceptación es el instrumento utilizado para reunir pruebas que se han de utilizar en un juicio penal.

**Párrafo 3 c)**

**¿Con qué otros países ha concertado acuerdos Italia para luchar contra el terrorismo aparte de los enumerados en el apartado c) del párrafo 3 del informe?  
¿Se ha concertado un acuerdo con la Jamahiriya Árabe Libia?**

Tras la presentación del primer informe al Comité contra el Terrorismo se han firmado o negociado los siguientes acuerdos (ya enumerados en el informe de Italia al Comité contra el Terrorismo acerca de la asistencia técnica y financiera a los fines de luchar contra el terrorismo):

ESLOVAQUIA. El 19 de abril de 2002 se firmó un acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de estupefacientes.

IRÁN. Además del *Memorando de entendimiento* contra el tráfico ilegal de estupefacientes, firmado en Roma el 10 de marzo de 1999, el 31 de octubre de 2002 se firmó en Roma un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.

LETONIA. Se encuentra en una etapa avanzada de negociación un acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de estupefacientes.

LIBIA. El Acuerdo de Cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la inmigración ilegal (firmado en Roma el 13 de diciembre de 2000) ha sido ratificado por ambas Partes y se espera que entre pronto en vigor.

**El Comité contra el Terrorismo agradecería que se le comunicara con qué países ha firmado Italia tratados bilaterales de extradición y de asistencia judicial recíproca.**

La siguiente es una lista de tratados de extradición actualmente vigentes para Italia.

**ARGENTINA**

Tratado de extradición firmado el 9 de diciembre de 1987

**AUSTRIA**

Tratado de extradición firmado el 2 de agosto de 1985

Convenio para la extradición de malhechores, firmado el 6 de abril de 1922

Convenio adicional del Convenio del 6 de abril de 1922 para la extradición de malhechores, firmado el 26 de marzo de 1934

Acuerdo adicional de la Convención Europea de Extradición de 13 de diciembre de 1957 y acuerdo para facilitar su aplicación, firmado el 20 de noviembre de 1973

**BAHAMAS**

Intercambio de Notas para mantener vigente el Convenio de extradición italo-británico de 5 de febrero de 1873, firmado el 7 de agosto de 1980

## BÉLGICA

Convenio para la extradición recíproca de malhechores, firmado el 15 de enero de 1875

Declaración por la que se enmienda el artículo 16 del Convenio de 15 de enero de 1875, firmado el 10 de marzo de 1879

Declaración por la que se enmienda el Convenio de extradición de 15 de enero de 1875, firmado el 30 de diciembre de 1881

Declaración por la que se enmienda el Convenio de extradición de 15 de enero de 1875, firmada el 28 de enero de 1929

## BOLIVIA

Tratado de amistad y extradición, con declaración, firmado el 18 de octubre de 1890

Intercambio de Notas para enmendar el artículo 3 del tratado de amistad y extradición de 18 de octubre de 1890, firmado el 24 de marzo de 1967

## BRASIL

Tratado de extradición firmado el 17 de octubre de 1989

## CANADÁ

Tratado de extradición firmado el 6 de mayo de 1981

## COSTA RICA

Convenio para la extradición recíproca de malhechores, firmado el 6 de abril de 1973

## CONSEJO DE EUROPA

Convención europea de extradición (24) firmada el 13 de diciembre de 1957

Segundo protocolo adicional de la Convención europea de extradición (98), firmado el 17 de marzo de 1978

Convenio para la transferencia de personas condenadas (112) firmado el 21 de marzo de 1983

## CUBA

Tratado de extradición firmado el 4 de octubre de 1928

Intercambio de Notas sobre la interpretación del artículo 4 del Tratado de extradición de 4 de octubre de 1928, firmado el 2 de marzo de 1932

## EL SALVADOR

Tratado de extradición, firmado el 29 de marzo de 1871

## ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Tratado de extradición firmado el 13 de octubre de 1983

## FINLANDIA

Tratado de asistencia judicial recíproca y extradición en materia penal, firmado el 10 de julio de 1929



---

**FRANCIA**

Convenio para la extradición recíproca de malhechores, firmado el 12 de mayo de 1870

Declaración por la que se especifica el significado del artículo 1 (23) del Convenio de Extradición de 12 de mayo de 1870, firmado el 16 de julio de 1873

**HUNGRÍA**

Convenio de asistencia judicial recíproca en materia penal y extradición, firmado el 26 de mayo de 1977

**KENYA**

Intercambio de Notas por el que se confirma la Convención ítalo-británica de 5 de febrero de 1873 para la extradición recíproca de malhechores, firmado el 8 de diciembre de 1967

**LÍBANO**

Convenio de asistencia judicial recíproca en materia civil, comercial y penal y sobre la ejecución de fallos y laudos arbitrales y decretos de extradición, firmado el 10 de julio de 1970

**LUXEMBURGO**

Convenio de extradición firmado el 25 de octubre de 1878

**MALTA**

Acuerdo de extradición recíproca relativo a personas condenadas por algunos delitos, firmado el 3 de mayo de 1863

Convenio ítalo-británico sobre la extradición recíproca de malhechores, firmado el 1º de abril de 1873

Acuerdo para la extradición de malhechores, firmado el 13 de octubre de 1880

**MARRUECOS**

Convenio de Asistencia Judicial Recíproca para aplicar los fallos judiciales y los decretos de extradición, firmado el 12 de febrero de 1971

**MÉXICO**

Convenio de extradición de malhechores firmado el 22 de mayo de 1899

**MÓNACO**

Convenio de extradición de malhechores firmado el 26 de marzo de 1866

Declaración por la que se enmienda el artículo 14 del Convenio de extradición de 26 de marzo de 1866, firmado el 19 de diciembre de 1896

**NUEVA ZELANDIA**

Convenio ítalo-británico de extradición firmado el 5 de febrero de 1873

**PAÍSES BAJOS**

Convenio de extradición firmado el 28 de mayo de 1897

PARAGUAY

Tratado de extradición firmado el 19 de marzo de 1997

PERÚ

Tratado de transferencia de personas condenadas y menores con tratamiento especial, firmado el 24 de noviembre de 1994

POLONIA

Tratado de extradición firmado el 28 de abril de 1989

PORTUGAL

Tratado de extradición firmado el 18 de marzo de 1878

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Intercambio de Notas para regular provisionalmente la aplicación recíproca de algunas disposiciones de la Convención europea de extradición de 13 de diciembre de 1957 y la Convención europea de asistencia recíproca en materia penal, de 20 de abril de 1959, firmado el 18 de julio de 1972

Acuerdo adicional de la Convención europea de extradición de 13 de diciembre de 1957 para facilitar su aplicación, firmado de 24 de octubre de 1979

SINGAPUR

Convenio italo-británico de extradición recíproca de malhechores, firmado el 5 de febrero de 1973

SRI LANKA

Convenio italo-británico de extradición recíproca de malhechores, firmado el 5 de febrero de 1873

TÚNEZ

Convenio de asistencia judicial en materia civil, comercial y penal, reconocimiento y ejecución de fallos y laudos arbitrales y extradición, firmado el 15 de noviembre de 1967

UNIÓN EUROPEA

Acuerdo entre los Estados Miembros de las Comunidades Europeas sobre la simplificación y modernización de los métodos de transmisión de pedidos de extradición, firmado el 26 de mayo de 1989

URUGUAY

Convenio de extradición firmado el 14 de abril de 1879

VENEZUELA

Tratado de extradición y de asistencia judicial en materia penal, firmado el 23 de agosto de 1930

## YUGOSLAVIA

Convenio de extradición de malhechores, firmado el 6 de abril de 1922

Además, Italia ha iniciado contactos o negociaciones con una docena de países con miras a concertar nuevos acuerdos de extradición.

### **Párrafo 3 d)**

**El Comité contra el terrorismo acogería con beneplácito un informe, en relación con las convenciones y los protocolos internacionales relacionados con el terrorismo, acerca de las medidas adoptadas en lo que respecta a:**

- Pasar a formar parte de los instrumentos en los que Italia todavía no es parte**

Tras la presentación del primer informe al Comité contra el Terrorismo a fines del año pasado, Italia depositó en poder de la OACI su instrumento de adhesión a la Convención sobre la necesidad de marcar los explosivos plásticos a fin de hacerlos reconocibles el 26 de septiembre de 2002. Esa Convención se abrió a la firma en Montreal el 1º de marzo de 1991 y entró en vigor en Italia el 25 de noviembre de 2002.

Italia es parte además en 10 de los 12 convenios internacionales para luchar contra el terrorismo, con exclusión del Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas y del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, que se hallan ya en la etapa final del procedimiento de ratificación. Por cuanto las leyes de ratificación no sólo dan pleno vigor a los convenios en Italia, sino que incluyen además disposiciones encaminadas a enmendar la legislación interna de manera de ajustarla completamente a las disposiciones de esos instrumentos internacionales, Italia informará acerca de su contenido exacto una vez que se hayan completado los procedimientos de ratificación.

- Promulgar legislación, y hacer otros arreglos necesarios, para poner en práctica los instrumentos en que se ha hecho parte**

Los tratados multilaterales contra el terrorismo en los que es parte Italia, a saber, las primeras 10 convenciones de las Naciones Unidas y la Convención Europea para la represión del terrorismo, establecen principalmente obligaciones de tipificar algunos delitos. Se enuncian disposiciones más detalladas, en particular en relación con la cooperación judicial internacional y la prevención, en los dos convenios recientes de las Naciones Unidas. A fin de poner en práctica los convenios Italia ha introducido en su legislación dos delitos nuevos o ha introducido enmiendas en la legislación vigente en los casos en que se consideró insuficiente. El marco general del derecho penal italiano encaminado a poner en práctica esos convenios abarca delitos comunes y delitos en los que se tiene expresamente en cuenta que el terrorismo es su propósito. Entre los nuevos delitos se incluyen en particular todos aquellos que incluyen elementos de violencia contra los bienes y las personas, y en particular los dirigidos contra los órganos constitucionales, los Jefes de Estado nacionales extranjeros, y los representantes de Estados extranjeros (artículos 289, 295 y 298 del Código Penal). Estos objetivos en particular se mencionan en el artículo 270-bis (en la forma en que fue enmendado por la ley No. 438/2001) sobre asociaciones con fines de terrorismo, incluido el terrorismo internacional, y la subversión del orden

democrático, el artículo 280, sobre ataques con fines terroristas o subversivos, y el artículo 289-bis, secuestro con fines de terrorismo o subversión.

**Párrafo 3 e)**

**¿Se han incluido en los tratados bilaterales en que es parte Italia los delitos enunciados en los convenios internacionales y protocolos pertinentes relacionados con el terrorismo como delitos susceptibles de extradición?**

Salvo un acuerdo que entró en vigor en Italia entre la República Italiana y la República Socialista de Checoslovaquia acerca de la prestación de asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Praga el 6 de diciembre de 1985 (que se refería en el artículo 3 a los delitos de terrorismo en relación con el transporte aéreo), no existen otros acuerdos bilaterales de extradición respecto de delitos relacionados con el terrorismo. No obstante, los delitos respecto de los cuales se pide extradición incluyen implícitamente los delitos de terrorismo. En consecuencia, es posible pedir la extradición respecto de un crimen de terrorismo cuando ambas partes consideran que el acto cae dentro del ámbito de una disposición penal.

Esta es la fórmula que se usa en general. 1) Los siguientes podrán ser objeto de extradición: a) los individuos enjuiciados por delitos penados por las leyes de las partes contratantes con pena máxima de prisión de por lo menos dos años o una pena más grave; b) los individuos que hayan sido condenados por los tribunales del Estado solicitante en sentencia definitiva por delitos punibles por las leyes de ambas partes contratantes por un período no inferior a seis meses de prisión. 2) En caso de que se solicite la extradición respecto de más de un delito, alguno de los cuales no esté sujeto a las condiciones indicada anteriormente con respecto a la duración de la sentencia, la parte contratante a la que se haya solicitado la extradición podrá permitirla respecto de todos los delitos.

**Párrafo 3 f)**

**Sírvase reseñar el contenido de los párrafos 1 y 2 del artículo 380 del Código de Procedimiento Penal en la medida en que sea pertinente a la aplicación de este apartado.**

La referencia a los párrafos 1 y 2 del artículo 380 del Código de Procedimiento Penal debe entenderse en el sentido de que no es posible admitir en Italia a un extranjero que se proponga solicitar la condición de refugiado cuando la Policía de Fronteras se ha cerciorado de que el solicitante ya ha sido condenado por un delito en Italia: por un delito respecto del cual la legislación prevea una pena de presidio perpetuo o de prisión no inferior a cinco años y no superior a 20 años (párrafo 1 del artículo 380 del Código de Procedimiento Penal), o, fuera de los plazos de la sentencia anteriormente indicados, una persona que haya sido condenada por uno de los delitos indicados en el párrafo 2 del artículo 380 del Código de Procedimiento Penal. Este comprende una gran diversidad de tipos de delitos que van desde los delitos contra la personalidad del Estado (entre los cuales se incluyen los delitos de terrorismo), la prostitución y la pornografía que implique niños, hurto y robo agravados, delitos relacionados con armas (incluidas armas de guerra o partes de ellas, explosivos y armas ilegales) y delitos de conspiración relacionados con la mafia.

**Párrafo 3 g)**

**En el apartado g) del párrafo 3 de la resolución se pide a los Estados que procuren que no se reconozcan los fundamentos políticos como base para rechazar las solicitudes de extradición de los presuntos terroristas. Sírvese aclarar la forma en que Italia se propone cumplir este requisito atendidos el párrafo 4 del artículo 10 y el párrafo 2 del artículo 26 de su Constitución.**

El párrafo 4 del artículo 10 y el párrafo 2 del artículo 26 de la Constitución de Italia excluyen la posibilidad de extradición por delitos políticos. No obstante, de conformidad con la jurisprudencia italiana, los actos graves de terrorismo no constituyen delitos políticos, sino que son delitos que atentan contra el derecho fundamental a la vida y la integridad física. Por lo tanto, en los acuerdos bilaterales celebrados por Italia pueden utilizarse como base para pedir la extradición todos los delitos previstos en las convenciones internacionales sobre el terrorismo.

**En este contexto, sírvase aclarar si las reservas de Italia a la Convención Europea de Represión del Terrorismo, celebrada en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, siguen siendo válidas respecto de los Estados parte en la Convención Europea de Represión del Terrorismo y explique si refleja la práctica de Italia con respecto a otros Estados.**

Cabe señalar que, en lo que respecta al párrafo 4 del artículo 10 y el párrafo 2 del artículo 26 de la Constitución de Italia, que prohíben la extradición por delitos políticos, la jurisprudencia italiana ha adoptado desde hace mucho tiempo la posición de que no puede entenderse esa disposición en el sentido de aplicarse a los actos de terrorismo cometidos contra ciudadanos indefensos. La opinión que prevalece es que deben considerarse los derechos fundamentales a la vida y la integridad personal. La reserva que Italia presentó a la Convención Europea de Represión del Terrorismo, celebrada en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, son por lo tanto válidas todavía y están vigentes respecto de los demás Estados Miembros<sup>6</sup>.

**Párrafo 4**

**¿Se ha ocupado Italia de algunas preocupaciones expresadas en el párrafo 4 de la resolución?**

Italia presta constantemente atención a la cuestión de los vínculos entre el terrorismo internacional y las actividades criminales indicadas en el párrafo 4 de la resolución 1373. A ese respecto la trata de seres humanos es particularmente importante, porque se halla estrechamente vinculada con otras actividades del mundo criminal organizado, como el contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes y la explotación de la prostitución. Además, es evidente que gran cantidad de personas que suelen llegar a suelo italiano sin documentos de identidad dan lugar al riesgo de infiltración por individuos vinculados a organizaciones terroristas. Italia, en tanto puente natural del Mediterráneo con África, los Balcanes y el Oriente, tiene las fronteras europeas externas más delicadas y la cuestión de luchar contra la inmigración ilegal es, en consecuencia, una prioridad tanto para la seguridad interna italiana como para la política exterior italiana.

La labor bilateral de Italia con los países de origen y de tránsito (párrafo 2 del artículo 1 de la nueva Ley de Inmigración) hace que deba evaluarse y tomarse en cuenta la cooperación ofrecida por los países no miembros de la Unión Europea en la lucha contra la inmigración ilegal y los fenómenos relacionados con la

delincuencia organizada respecto de las normas que rigen la seguridad del transporte marítimo. De esta manera, es necesario llevar adelante nuevas iniciativas concretas adoptadas con algunos países, y que en muchos casos han producido resultados exitosos. En lo que respecta a los países implicados o a riesgo de participar en el tráfico ilegal de inmigrantes por vía marítima, se ha emprendido labor diplomática para crear conciencia en todos los Estados acerca de la necesidad de velar por que las normas internacionales que rigen la seguridad del transporte marítimo (los llamados principios de “control del Estado del puerto”) se apliquen respecto de todas las embarcaciones que salen de sus propios puertos y de sus costas.

Desde 1997 Italia ha estado utilizando la vía diplomática para elaborar normas internacionales encaminadas a luchar contra el tráfico y el transporte de inmigrantes ilegales por mar, lo que llevó a la aprobación por las Naciones Unidas del Protocolo contra el tráfico ilícito de emigrantes por tierra, mar y aire, anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecha en Palermo en diciembre de 2000.

La cuestión de la lucha contra la inmigración ilegal forma parte central además de la nueva legislación promulgada en la Ley de Inmigración. Se ha reformado sustancialmente todo el sistema de deportación administrativa a fin de dar mayor garantía de que la orden de deportación se ejecute efectivamente. Desde el punto de vista de la justicia penal, la ley que castiga la complicidad en el tráfico de seres humanos se ha hecho más estricta, con penas menores en el caso de los que cooperan con la policía y los tribunales. El Ministerio de Asuntos Interiores coordina los controles fronterizos, en tanto que la marina italiana puede colaborar también en la vigilancia del transporte marítimo. Se han introducido además cambios en la ley que rige el derecho de asilo a fin de impedir que se pida asilo exclusivamente para evadir la deportación. Actualmente se fotografía y se toman las huellas digitales de los extranjeros que pidieron permiso de residencia o la renovación de un permiso de estada vigente.

Además, Italia ha llevado la cuestión de la migración ilegal a un lugar importante en el programa de la Unión Europea y sus Estados miembros. Las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Sevilla reflejan ampliamente la posición italiana. El Consejo ha enviado un fuerte mensaje respecto de las visas, los acuerdos de readmisión, la política de deportación y reparación, y la promulgación de leyes para luchar contra las organizaciones que gestionan este tráfico ilícito. Los objetivos fijados para controlar las fronteras comunes coinciden en gran medida con los propuestos en el estudio de practicabilidad de la Fuerza Policial Fronteriza Europea presentado por Italia. Los resultados en cuanto a las relaciones con terceros países han sido también positivos, con la incorporación de una cláusula relativa a la migración en los acuerdos de cooperación.

### **Otros asuntos**

**¿Puede Italia suministrar un organigrama de su mecanismo administrativo, como el de las autoridades de supervisión policial, de control de inmigración, de aduanas, de tributación y financieras, establecido para poner en práctica las leyes, los reglamentos y otros documentos que se considera que contribuyen al cumplimiento de la resolución?**

A este respecto cabe destacar en primer lugar la función desempeñada por el Comité de Seguridad Financiera, cuyas atribuciones para supervisar todas las actividades relacionadas con la financiación del terrorismo se ilustraron en detalle en el primer informe presentado al Comité contra el Terrorismo a fines del año anterior. Con objeto de ilustrar las características operacionales prácticas y la atención que se prestaba a las Naciones Unidas a este respecto, basta recordar que el Comité de Seguridad Financiera se halla en el origen de las propuestas que Italia presentó con el fin de ampliar la lista de individuos y de organizaciones terroristas en el marco de la resolución 1390.

En lo que se refiere a la policía, cabe destacar el papel del Ministerio de Asuntos Interiores, en particular el Departamento de Seguridad Pública, que se encarga de:

- Aplicar la política de seguridad y orden público;
- Coordinar los aspectos técnicos y operacionales de las fuerzas policiales;
- Dirigir y administrar la *Polizia di Stato* (fuerza policial nacional);
- Dirigir y administrar las instalaciones de apoyo técnico, entre las cuales se incluyen el cumplimiento de los requisitos generales del Ministerio de Asuntos Interiores.

El Departamento está organizado en direcciones y oficinas centrales del mismo nivel, que también tienen relaciones entre los servicios según criterios y procedimientos orgánicos establecidos en la ley. A este respecto las fuerzas policiales encargadas de las operaciones preventivas revisten importancia primordial. Esas fuerzas son altamente especializadas y en su nivel central comprenden la “Dirección Central de Policía Preventiva” (D.C.P.P.), que forma parte del Departamento de Seguridad Pública, y en el plano local las oficinas DIGOS que operan a nivel de *Questura* (Cuartel General de la Policía Provincial).

En la etapa actual las medidas preventivas y de cumplimiento de la ley están orientadas principalmente a lo siguiente:

- Organizaciones terroristas nacionales e internacionales;
- Organizaciones subversivas entre cuyos fines se incluyen la incitación a la división y a la violencia por razones raciales, étnicas, nacionales o religiosas;
- Las asociaciones dedicadas a destruir la integridad, la independencia y la unidad del Estado, o a subvertir el orden constitucional por medios no permitidos por la ley;
- Grupos extremistas que procuran objetivos de subversión social mediante la violencia y prácticas ilegales;
- Organizaciones militares o paramilitares;
- Delitos contra la administración pública cada vez que el fenómeno mismo y el carácter sistemático y grave de los crímenes cometidos asuma tal magnitud que menoscabe la credibilidad y el funcionamiento de las instituciones;
- La inmigración ilegal y el tráfico internacional de armas respecto de aspectos relacionados con la participación de organizaciones terroristas nacionales e internacionales;

- Asociaciones secretas;
- Organizaciones y congregaciones sectarias con fines ilícitos;
- Terrorismo por medio de computadoras;
- “Violencia de grupo” basada en ideologías marcadas por la agresión sistemática;
- Episodios de actos ilegales por grupos organizados en reuniones deportivas;
- Otros delitos que incluso indirectamente tienen repercusiones negativas sobre la defensa y la seguridad del Estado, la protección de las libertades y el ejercicio de los derechos ciudadanos, y sobre la seguridad y el orden públicos.

“La Dirección General de Policía Criminal” (*Direzione Generale della Polizia Criminale*) es también importante y tiene las tareas siguientes:

- Coordinar las investigaciones policiales judiciales en el plano nacional, especialmente en relación con la búsqueda y captura de fugitivos peligrosos y de organizaciones criminales de la mafia;
- Recopilar, analizar y procesar datos e informaciones relacionadas con delitos más graves;
- Cooperación internacional con países extranjeros para luchar contra la delincuencia organizada con el intercambio recíproco de información y estrategias y procedimientos operacionales encaminados a luchar contra los casos más graves de delincuencia transnacional (tráfico de estupefacientes, blanqueo de dinero, tráfico de vehículos, falsificación de moneda, delitos relacionados con la computación y delitos ambientales);
- El tratamiento de los individuos dispuestos a declarar en los juicios iniciados por el Estado;
- Coordinación en el plano nacional de la política preventiva y del cumplimiento de la ley en general;
- La prestación de apoyo técnico y científico a los organismos investigadores y a los tribunales para realizar indagaciones que requieran el uso de conocimientos profesionales especializados.

Además de lo anterior, debe hacerse especial referencia al artículo 4 de la Ley No. 438, de 15 de diciembre de 2001, que faculta, entre otras cosas, a las dependencias especializadas de investigación de los Carabinieri para luchar contra el terrorismo interno e internacional. Los Carabinieri tienen una dependencia especial para este objeto, tanto para el acopio de información como para las investigaciones, y para ocuparse de situaciones que requieran un nivel elevado de especialización. Con respecto a lo anterior, en 1990 el Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) (Grupo Especial de Operaciones) se creó para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. El ROS es miembro de una estructura central basada en Roma, cuyas tareas prioritarias son el análisis, la coordinación y la prestación de apoyo técnico y operacional, con 26 “secciones anticriminales” locales para luchar contra la delincuencia incorporadas a las oficinas del fiscal público de distrito, para ayudar a los magistrados investigadores y dar respuesta operacional a sus necesidades. En particular, la “dependencia antisubversión” analiza la subversión y el terrorismo, tanto nacional como internacional, coordina la labor de las “secciones anticriminales” y las demás dependencias territoriales de los Carabinieri, y dirige las investigaciones



más importantes. Las dependencias investigativas primera y segunda hacen el vínculo y enlace con las investigaciones de la delincuencia organizada, en tanto que la dependencia tercera se ocupa exclusivamente de analizar y estudiar la delincuencia organizada. La “dependencia técnica”, finalmente, presta el apoyo tecnológico necesario para las investigaciones con el equipo más adelantado, además de labor de investigación y experimental, así como las investigaciones relativas a la delincuencia computarizada.

En el plano local, las “secciones anticriminales” reúnen información y realizan investigaciones acerca de delitos relacionados con la delincuencia organizada, el terrorismo y la subversión. La labor de información y operacional de la “dependencia antisubversión” del ROS y las “secciones anticriminales” usan la información reunida a escala nacional por los Comandos Provinciales y las 5.000 estaciones —“Compagnie Stazioni”— encargadas del cumplimiento de la ley en el plano local.

Finalmente, dentro del Ministerio del Interior debe mencionarse la “oficina de coordinación y planificación de las fuerzas policiales”, encargada de la necesidad cada vez más urgente de racionalizar la potencialidad estructural y operacional de las fuerzas policiales, hacer aprovechamiento óptimo de los recursos y de su distribución y de integrar la organización y puesta en práctica de sus servicios con arreglo a un plan sistemático convenido conjuntamente. En tanto dependencia enteramente interinstitucional, y en razón de su modus operandi particular en contacto estrecho y directo con los comandos y las direcciones centrales de las fuerzas policiales, y en razón de su posición especial dentro de la administración policial, esta oficina puede definirse con certeza como el “hogar común” de todas las fuerzas policiales italianas.

En lo que respecta a la cuestión de la lucha contra la inmigración, cabe recordar además que se ha creado en el marco del Ministerio de Asuntos Interiores, el Departamento de Libertades Civiles e Inmigración a fin de realizar las funciones y tareas del Ministerio de Asuntos Interiores de protección de los derechos civiles, que incluyen la inmigración, el asilo, la ciudadanía y las denominaciones religiosas.

## Notas

<sup>1</sup> El delito de blanqueo de dinero se introdujo en el Código Penal italiano por primera vez en 1978. Inicialmente su alcance era muy limitado por cuanto se relacionaba solamente con el blanqueo de dinero o de acciones derivadas de un robo agravado, extorsión agravada o secuestro con fines de extorsión. Durante el decenio de 1980 aumentó constantemente el delito de blanqueo de dinero, lo que dio lugar a un proceso en que se reformó la ley, en parte como resultado de los instrumentos jurídicos que se elaboraron en el plano internacional, los principales de los cuales eran los siguientes: la Declaración de Principios del Comité de Basilea, formulada por el Comité de Pagos Bancarios y Procedimientos de Supervisión, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmada en Viena el 28 de diciembre de 1988, y la Convención del Consejo de Europa sobre el blanqueo de dinero, la investigación, el comiso y la confiscación de los productos del delito, firmada en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.

En el plano nacional, la tipificación del delito para cumplir los principios de esas convenciones se puso en práctica por primera vez en la Ley No. 55/90 y a continuación en la Ley No. 328/93. Esas disposiciones jurídicas tipifican ahora como delito de blanqueo, la transferencia de dinero, activos u otros bienes derivados de un acto criminal no malicioso, o la realización de cualquier otra operación encaminada a prevenir la identificación del origen criminal (blanqueo de dinero B, artículo 648-bis); el uso en actividades económicas o financieras de dinero, activos u otros bienes que sean producto de delitos (reutilización, artículo 648-ter). En particular, en la Ley No. 197/91 (limitación del uso de dinero efectivo) se introdujeron disposiciones para prevenir el

uso del sistema financiero con fines de blanqueo de dinero. En suma, esas normas disponen lo siguiente: una prohibición de la transferencia de dinero efectivo o de bonos al portador o de acciones no inscritas entre diferentes individuos salvo por conducto de intermediarios financieros calificados (bancos, SIM, empresas de seguros y otros intermediarios y agentes sujetos a supervisión); la obligación de todos los intermediarios financieros, independientemente de si estén calificados y autorizados para operar con transacciones en efectivo o no, de identificar a los clientes que realizan operaciones por sumas superiores a 20 millones de liras, inscribir los datos relativos a esas operaciones en un solo archivo computarizado y notificar a las autoridades de todas las operaciones sospechosas.

<sup>2</sup> La más alta autoridad supranacional encargada de luchar contra el blanqueo internacional de dinero que se estableció dentro de la OCDE, y a la cual pertenecen 29 países, incluida Italia.

<sup>3</sup> Actualmente con arreglo a los artículos 150 y 151 de la Ley No. 388, de 23 de diciembre de 2000, la UIC presta asesoramiento al Parlamento y al Gobierno respecto de la prevención de la delincuencia financiera y económica y la lucha contra ella y constituye la dependencia de información financiera de Italia con arreglo al párrafo 3 del artículo 2 de la Decisión 2000/642/GAI, del Consejo de la Unión Europea, de 23 de octubre de 2000, en que se establecen los procedimientos de cooperación entre las dependencias de información financiera de los Estados miembros en relación con el intercambio de información.

<sup>4</sup> Se indican las categorías siguientes: recuperación de préstamos para terceros, custodia y transporte de dinero efectivo y valores con guardias de seguridad privados, el transporte de dinero efectivo y valores sin guardias de seguridad privados, agentes y corredores de valores, comerciantes de antigüedades, casas de remate o galerías de arte, comercio, incluida la exportación y la importación de oro con fines industriales o para inversión, la manufactura, agencia y comercio de objetos valiosos, incluidas su importación y su exportación, administración de casinos, manufacturas de objetos preciosos por empresas artesanales, corretaje de préstamos, agencias de activos financieros, agencias de seguros y de promoción financiera.

<sup>5</sup> Decreto Interdepartamental de 27 de abril de 1990.

<sup>6</sup> Reservas hechas en el momento de la firma, el 27 de enero de 1977, y confirmadas en el momento del depósito del instrumento de ratificación, el 28 de febrero de 1986 —original: francés.

Italia declara que se reserva el derecho a rechazar la extradición y la asistencia recíproca en materia penal respecto de todo delito mencionado en el artículo 1 que considere que constituye un delito político, un delito conexo de un delito político o un delito inspirado en razones políticas: en ese caso, Italia se compromete a tomar debidamente en cuenta al evaluar el carácter del delito todos los aspectos particularmente graves del delito, incluidos:

- a) Que generó un riesgo colectivo para la vida, la integridad física o la libertad de personas; o
- b) Que afectó a personas ajenas a los motivos en que se basó; o
- c) Que se utilizaron medios crueles o excesivos en la comisión del delito;
- d) Período abarcado: 1° de junio de 1986. La declaración anterior se refiere al artículo: 1) Promulgación de legislación, y hacer los demás arreglos necesarios, para poner en práctica los instrumentos en que se ha hecho parte.